



Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2015 00866 00
ACCIONANTE: MARTHA FABIOLA GUALTEROS ROCHA
ACCIONADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR.
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia inicial y audiencia de pruebas. Las condiciones para prescindir de la respectivas audiencias se enuncian así: (i) cuando el asunto sea de puro derecho; (ii) cuando no haya que practicar pruebas, (iii) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, (iv) cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Por manera que los presupuestos para prescindir o no de la audiencia inicial, se contraen a evaluar los requerimientos probatorios para definir el asunto.

No obstante, el artículo 180 (Num. 6º) del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, determinó que en el auto que se pronuncie sobre las pruebas se decidirán las excepciones pendientes de resolver y la fijación del litigio. Al armonizar esta norma con la citada en el párrafo anterior - artículo 182A del CPACA – resulta válido afirmar que al momento de revisar las aludidas condiciones para prescindir de la celebración de las respectivas audiencias, se pueden decidir las excepciones previas y la fijación del litigio. Ello se explica en que el artículo 180 del CPACA estableció que previo a pronunciarse sobre las pruebas se deben decidir las excepciones previas y fijar el litigio. La secuencia de las decisiones obedece a que en caso de prosperar alguna excepción previa, resultaría inoficioso tratar el tema probatorio. Igualmente, al revisar la fijación litigio se adquiere el criterio suficiente para determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas que soliciten las partes. Siendo así, el Despacho primero asumirá el estudio de las excepciones previas y de la fijación del litigio, antes abordar los aspectos probatorios a los que alude el artículo 182A del CPACA.

1. EXCEPCIONES

Revisada la contestación, se advierte que se formularon excepciones de fondo y previas. Las excepciones de fondo no se mencionaran porque se resuelven en sentencia más no en esta oportunidad. Las excepciones con el carácter de previas se denominaron así: “falta de jurisdicción”, “inepta demanda por indebida acumulación



de pretensiones” y “caducidad”. El estudio de las excepciones previas se asumirá por separado y en el orden que se propusieron en el escrito de defensa. Igualmente, se tendrá en cuenta el escrito por medio del cual se describió el traslado de las excepciones que obra a folios 170 y 172 del expediente. Veamos:

1.1 Falta de jurisdicción. La defensa considera que con la demanda se pretende la nulidad de actos de ejecución, y por consiguiente, no son susceptibles de control judicial. Específicamente, se refiere a los actos enunciados en las pretensiones del numeral 1º y 2º, a saber: las Resoluciones 6513 de 4 de agosto de 2014¹, 7339 de 1º de septiembre de 2014² y 7653 de 11 de septiembre de 2014³.

La razón por la cual las considera actos de ejecución reside en las citadas Resoluciones no definen de fondo la actuación administrativa. A su criterio, la administración las expidió para materializar o ejecutar la decisión que había tomado de encargar de la Oficina Jurídica a la aquí demandante, Martha Fabiola Gualteros Rocha. Agrega que la jurisdicción sólo controla aquellos actos que terminan la actuación administrativa en cuanto contienen una decisión de fondo, directa o indirecta. Agregó que excepcionalmente los actos de trámite se someten a la Jurisdicción cuando impiden continuar con la actuación. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado que versa sobre los actos objeto del control judicial y el artículo 43 del CPACA que indica cuáles son los actos administrativos definitivos.

A *contrario sensu*, la parte actora señala que los actos no son de trámite sino definitivos en cuanto que concluyen la actuación administrativa, con lo cual quiso decir que definen el fondo del asunto y producen efectos jurídicos. En concreto, aduce que las aludidas Resoluciones generaron una situación administrativa, cuál es, encargar de funciones de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Precisa que el encargo se realizó por el tiempo que estuvo ausente el titular del aludido cargo. La Resolución 6513 de 2014 concedió el encargo por vacaciones del titular y por el tiempo transcurrido del 4 al 26 de agosto de 2014. Mientras que la Resolución 7339 de 2014, aclarada por la Resolución 7653 de 2014, concedió el encargo por incapacidad médica general del titular y por el periodo que iba del 1 al 30 de septiembre de 2014.

Para decidir se CONSIDERA:

El Despacho considera que la postura válida jurídicamente es la expuesta por la parte actora. En efecto, las Resoluciones 6513 de 4 de agosto de 2014⁴, 7339 de 1º de septiembre de 2014⁵ y 7653 de 11 de septiembre de 2014⁶ contienen la decisión de encargar de funciones a Martha Fabiola Gualteros Rocha. Si fueran actos de ejecución, el excepcionante tendría que haber indicado y aportado el acto que sí tomo la decisión de encargar. Como no lo hizo, se puede afirmar que las precitadas

¹ “Por la cual se efectúa un encargo por vacaciones en la oficina jurídica”.

² “Por la cual se efectúa un encargo por incapacidad médica en la Oficina Jurídica”.

³ “Por la cual se aclara la Resolución No. 7339 del 01/09/2014”.

⁴ “Por la cual se efectúa un encargo por vacaciones en la oficina jurídica”.

⁵ “Por la cual se efectúa un encargo por incapacidad médica en la Oficina Jurídica”.

⁶ “Por la cual se aclara la Resolución No. 7339 del 01/09/2014”.



Resoluciones no ejecutan sino que deciden el aludido encargo. Ello es igual a decir que las Resoluciones en estudio definen una de las situaciones administrativas dentro los cuales se puede encontrar un empleado público. Tal situación produce efectos jurídicos que se constituyen en el objeto de la presente controversia.

Así se concluye que los actos referidos son susceptibles de control judicial. Si bien es cierto, la excepción en estudio se debió denominar ineptitud de la demanda, para todos los efectos legales se entenderá que la excepción que identificó la defensa como falta jurisdicción, alude a que los actos demandados no son enjuiciables. Bajo tal entendido, más adelante se declarara infundada la excepción de falta de jurisdicción ya estudiada.

1.2 Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones. La entidad considera que algunas pretensiones de nulidad se excluyen con otras pretensiones formuladas a título de restablecimiento del derecho. De ahí que estime configurada la causal del numeral 2º del artículo 165 (Num. 2º) del CPACA, según el cual no se podrán acumular pretensiones cuando se excluyan entre sí.

Puntualmente, se vuelve a referir a las pretensiones del numeral 1 y 2 del respectivo acápite de la demanda. Allí se solicita la nulidad de las Resoluciones 6513 de 4 de agosto de 2014⁷, 7339 de 1º de septiembre de 2014⁸ y 7653 de 11 de septiembre de 2014⁹, que decidieron encargar de funciones de Jefe de la Oficina Jurídica de CASUR a Martha Fabiola Gualteros Rocha, según se ha visto. Esta solicitud de nulidad la confronta con las pretensiones del restablecimiento del derecho, en las cuales se persiguen el pago de los emolumentos del empleo en el cual se encargó a la demandante. Tales pretensiones se estiman que se excluyen entre sí.

La entidad sustenta la exclusión en que no se pueden declarar la nulidad del acto del encargo y al mismo tiempo solicitar los emolumentos del encargo. La razón que expone consiste en que los emolumentos se reclaman con base en los actos que hicieron el encargo, por lo que si se retiran del ordenamiento jurídico las Resoluciones del encargo, por sustracción de materia, tampoco habría lugar a reconocer los emolumentos reclamados, pues con la declaratoria de nulidad de los actos del encargo perderían efectos jurídicos los emolumentos que generó su expedición.

La entidad se apoya en el principio del derecho según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Al aplicar este principio al caso, señala que si se declara la nulidad de los actos del encargo, igual suerte debe correr el pago de los emolumentos que corresponderían al encargo, pues al desaparecer la situación administrativa del encargo que genera la obligación, es como si se queda sin piso los salarios y prestaciones del encargo. Por ello, el libelista aduce las pretensiones debieron proponerse en forma alternativa, es decir, como principales y subsidiarias.

⁷ “Por la cual se efectúa un encargo por vacaciones en la oficina jurídica”.

⁸ “Por la cual se efectúa un encargo por incapacidad médica en la Oficina Jurídica”.

⁹ “Por la cual se aclara la Resolución No. 7339 del 01/09/2014”.



La parte actora, por su parte, manifestó que la excepción no tenía vocación de prosperidad. La oposición se fundamenta en que los actos que generaron la situación administrativa, a la par que asignaban funciones a un cargo de mayor jerarquía, debía contar con disponibilidad presupuestal. Así quiso decir que los actos del encargo se expidieron sin el lleno de los requisitos formales, en alusión al requisito de la disponibilidad presupuestal, conforme lo dispone la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1267 de 2001, en armonía con la sentencia C-428 de 1997.

Para decidir se CONSIDERA:

El Despacho considera que la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones se construye sobre una interpretación formal de la demanda. En otras palabras, la entidad interpreta en abstracto las pretensiones de la demanda, sin consultar las circunstancias concretas, fácticas y jurídicas, sobre las cuales se formulan las pretensiones. Vale recordar que la interpretación de la demanda debe ser integral, es decir, el sentido de las pretensiones se debe armonizar con los hechos y las normas que sirven de fundamento a la demanda, pues de lo contrario se llegaría al raciocinio que hace el excepcionante.

En efecto, el silogismo que plantea la defensa se queda en la estrechez de las pretensiones. Es cierto que si reclaman beneficios con base en un acto administrativo, resulta excluyente que se pida la nulidad del acto que legaliza los salarios y prestaciones reclamadas. En otras palabras, si la parte actora pide los emolumentos por haberse desempeñado en encargo, no es lógico que solicite la nulidad del acto que concedió el encargo. Ello significa que en caso de prosperar la nulidad no podría generarse el pago pretendido a título de restablecimiento del derecho, lo cual configuraría la causal de indebida acumulación de pretensiones conocida como pretensiones excluyentes.

Sin embargo, al consultar los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, se advierte que la nulidad del encargo se solicita por omisión, más no por haber concedido el beneficio del encargo. La omisión por la cual se considera ilegal los actos del encargo, según la interpretación que esta servidora hace de la demanda, consiste en que no se ordenaron pagar los emolumentos del empleo encargado a la demandante, es decir, del empleo de Jefe de la Oficina Jurídica. La parte actora manifiesta que pese a desempeñar un empleo en encargo, continuo devengando los emolumentos de su empleo, cuando debió recibir los emolumentos del empleo que ostentó en encargo.

Entonces, es bajo la interpretación integral de la demanda, que se puede afirmar que las pretensiones de los numerales 1 y 2, que se refieren a la nulidad de las Resoluciones de los encargos, no excluye las pretensiones de restablecer el derecho en el sentido de ordenar el pago de los emolumentos concomitantes al encargo, en cuanto en los actos acusados omitieron ordenar su pago. Fíjense que la interpretación integral de la demanda, es la que garantiza el derecho constitucional fundamental de acceso a la administración. *A contrario sensu*, la interpretación formal y abstracta de la demanda, que propone la entidad, resulta lesiva de los derechos fundamentales de



encargada. Es por ello, que no prospera la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.

1.3 Caducidad. La entidad formula excepción de caducidad frente a las Resoluciones 6513 y 7339, ésta aclarada por la 7653, todas de 2014, por medio de cuales se concedió el encargo. De nuevo, la defensa se refiere a los actos enunciados en las pretensiones de los numerales 1 y 2, como se ha observado en precedencia. A su criterio la caducidad se cuenta a partir de la ejecución, esto es, cuando terminó el periodo del encargo. Esto significa que la actora no contabiliza el término de los cuatro (4) meses de vigencia de la acción, previsto en el artículo 164 del CPACA, a partir de la notificación, publicación o comunicación, sino con la ejecución.

En este caso, la situación administrativa de encargo, que se definió a través de la Resolución 6513 de 2014, se ejecutó entre el 4 y 26 de agosto de 2014. Por ello, frente a esta Resolución, considera que la caducidad de comienza a contar a partir del 27 de agosto de 2014. En igual sentido, afirma que el encargo efectuado a través de la Resolución 7339, aclarada por la Res. 7653, de 2014, se ejecutó desde el 31 de agosto al 30 de septiembre de 2014. De ahí que exprese que la caducidad se contabiliza a partir del 1º de octubre de 2014 frente a esta última actuación.

Al oponerse a la prosperidad de la excepción de caducidad, la accionante se limitó a expresar que demanda un silencio administrativo de la administración, frente a la petición con id control 54594 y radicado I-000005-2014011426 CASUR de 3 de diciembre de 2014.

Para decidir se CONSIDERA:

El estudio del fenómeno de la caducidad exige identificar todas las actuaciones administrativas pretendidas en nulidad. En primer lugar, el libelista pretende la nulidad de las Resoluciones 6513¹⁰, 7339¹¹ y 7653¹² de 2014 que encargan a Martha Fabiola Gualteros Rocha como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CASUR. En la primera Resolución se concedió el encargo por vacaciones de la titular por el periodo comprendido del 4 y 26 de agosto de 2014. En las demás Resoluciones mencionadas, el encargo se otorgó por incapacidad de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica causada entre el 31 de agosto al 29 de septiembre de 2014. La inconformidad frente a los actos del encargo consiste en que con su expedición no se ordenó conceder los emolumentos que corresponden al empleo encargado.

Los otros actos demandados se refieren a la liquidación de prestaciones sociales por retiro del servicio. La demandante fu retirada del servicio el 22 de febrero de 2015. Inicialmente, CASUR hizo la liquidación de salarios y prestaciones a través de la

¹⁰ "Por la cual se efectúa un encargo por vacaciones en la oficina jurídica".

¹¹ "Por la cual se efectúa un encargo por incapacidad médica en la Oficina Jurídica".

¹² "Por la cual se aclara la Resolución No. 7339 del 01/09/2014".



Resolución 3993 de 25 de mayo de 2015¹³. Luego, la entidad expidió la Resolución 6960 de 8 de octubre de 2015¹⁴ con el fin de reajustar la anterior liquidación a la nueva escala salarial del Decreto 1120 de 20 de mayo de 2015. La inconformidad con respecto a esta actuación se contrae a que se omitió liquidar las prestaciones sociales con los emolumentos del empleo del encargo.

En conclusión, la actora demandó dos tipos de actuaciones, a saber: los actos del encargo – Res. 6513, 7339 y 7653 de 2014 – y los actos que liquidaron y reajustaron las prestaciones sociales por retiro del servicio – Res. 3993 y 6960 de 2015. Vale decir que todos se demandan en cuanto que no reconocieron los emolumentos del empleo del encargo.

Sin embargo, no se puede afirmar que las actuaciones administrativas terminaron con la expedición de las aludidas Resoluciones. La razón estriba en que la actora interpuso una petición y un recurso de reposición con el fin que le pagaran los emolumentos o salarios y prestaciones del empleo en el cual fue encargada. En efecto, con la petición id control 54594 y radicado I-000005-2014011426 CASUR de 3 de diciembre de 2014, solicitó los emolumentos de encargo, que como se observó en precedencia, el último terminó el 30 de septiembre de 2014. Mientras que el recurso de reposición con radicado Id Control 90017 y radicado R-00023 - 3835026672¹⁵ CASUR se interpuso contra el acto que liquidó las prestaciones sociales por retiro del servicio. Estas últimas actuaciones de la accionante obran a folios 6 a 22 del expediente.

Ahora, la entidad se abstuvo de responder tanto la aludida petición como el recurso de reposición. Esto significa que la actuación administrativa terminó con el silencio de la administración que operó en dos sentidos: (i) frente a la petición de reconocimiento de los emolumentos del encargo, y (i) frente al recurso contra el acto que liquidó las prestaciones sin tomar como base los emolumentos del empleo del encargo.

Así las cosas, es válido concluir que tanto la actuación administrativa del encargo, como aquella de la liquidación de prestaciones sociales producto del retiro del servicio, terminaron con el silencio de la administración.

Ahora, otra cuestión es que el libelista no hubiese sido claro al formular las pretensiones contra los actos productos del silencio de la administración. En las pretensiones 1¹⁶ y 6¹⁷ de la demanda se refieren a los silencios de la administración

¹³ "Por la cual se ordena el reconocimiento y pago de prestaciones sociales al exfuncionario (a) Gualteros Rocha Martha Fabiola", expedida por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

¹⁴ "Por la cual se reajustan las prestaciones sociales a la exfuncionaria Martha Fabiola Gualteros Rocha".

¹⁵ Se aclara que algunos números son de difícil lectura.

¹⁶ "Se pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica en relación con la cosa juzgada, al acceso de la administración de justicia, al principio de igualdad y la garantía de publicidad de los Actos de la Administración; como consecuencia de ello, se ordene a CASUR dejar sin efecto las decisiones proferidas por esa Entidad mediante la cual se declaró el cumplimiento del deber legal que tiene la entidad frente a la administrada, tal y como se prueba en el protocolo del respectivo silencio Administrativo negativo, con el cual mediante escrituras públicas escritura pública (sic) No. 3083 de 11 de septiembre de 2015 de la notaría primera de Soacha, Cundinamarca."

¹⁷ "Que se tenga y declárese la causal de vulneración al debido proceso e Indevida notificación de Actos Administrativos, el cual debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, como son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; como la regla general de las actuaciones administrativas de carácter



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001-33-35-010-2015-00866-00

en términos de vulneración del debido proceso. Aunque el Juzgado, mediante auto de 15 de marzo de 2017 le ordenó que precisará *“con claridad sobre qué actos específicamente pretende la demandante la nulidad”*, el libelista se limitó a condensar las pretensiones 1 y 6 de la demanda, en la pretensión 5¹⁸ de la corrección de la demanda, es decir, volvió hacer énfasis en que se demandaba los silencios de la administración a manera de vulneración del debido proceso. Pese a la vaguedad de tales pretensiones, la demanda se admitió mediante auto de 24 de octubre de 2018. El Despacho considera que las pretensiones en las cuales no dice directamente que se demanda el silencio de la administración, sino la violación del debido proceso, se deben valorar a la luz del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia. Ello implica interpretar la demanda en su integridad, en aras de aplicar la directriz del artículo 228 de la Constitución Política, según la cual en las decisiones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. Igualmente, el artículo 103 del CPACA en armonía con los artículos 11 y 12 del CGP nos recuerda el que objeto de la ley procesal es hacer efectivo los derechos reconocidos en la Constitución y la ley.

En este caso, la interpretación de las pretensiones 1 y 6 de la demanda, que luego se condensan en la pretensión 5ª de la corrección de la demanda, se debe realizar en el sentido que se demanda el silencio de la administración, aunque no se expresó sino vaga la redacción, en aras de hacer prevalece los aspectos sustanciales de demanda referenciados en los hechos de la demanda. En efecto, en el acápite de los hechos de la demanda se hace referencia al silencio de la administración frente a la citada petición y el recurso de reposición. En el hecho 3, tanto de la demanda como de la subsanación de libelo introductorio, señala que la petición de 3 de diciembre de 2014 *“no fue contestada dentro del término legal, generándose un silencio Administrativo negativo”*. En el hecho 7 de la demanda, que luego transcribió en el hecho 8 de la subsanación de la misma, señaló que debido a que el recurso de reposición *“no fue resuelto dentro del término legal, se configuró un silencio administrativo”*. Adicionalmente, los hechos de la demanda señalan que protocolizó los silencios administrativos mediante las escrituras públicas 1961 y 3083 de 11 de junio y 11 de

general o particular están reguladas por la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes, siendo qué cómo (sic) se prueba en el plenario, existe el presente caso en donde la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) notifica sus decisiones o da respuesta de peticiones de manera extemporánea a un correo electrónico institucional (mqualteros@car.gov.co) que no es el autorizado previamente, tal y como lo remite en el anexo de notificación de fecha (usuario Alejandro Avendano (alejandro.avendano483@casur.gov.co) 05/10/2015); cuando media solicitud expresa y autorización de notificación al correo electrónico mail personal (marthaqualteros@hotmail.com.) para efecto de comunicación y notificación”.

¹⁸ “Téngase y Declárese la causal de vulneración al debido proceso e Indevida notificación de Actos Administrativos, el cual debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, como son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; como la regla general de las actuaciones administrativas de carácter general o particular están reguladas por la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes, siendo qué cómo (sic) se prueba en el plenario, existe el presente caso en donde la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) notifica sus decisiones o da respuesta de peticiones de manera extemporánea a un correo electrónico institucional (mqualteros@car.gov.co) que no es el autorizado previamente, tal y como lo remite en el anexo de notificación de fecha (sic) (usuario Alejandro Avendano (alejandro.avendano483@casur.gov.co) 05/10/2015); cuando media solicitud expresa y autorización de notificación al correo electrónico mail personal (marthaqualteros@hotmail.com.) para efecto de comunicación y notificación.

Que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando un trámite administrativo se inicia a partir de una petición, el término de prescripción de la acción sólo empieza a contar de nuevo desde que la Administración resuelve la petición mediante un Acto Administrativo”. debidamente notificado, o desde que, una vez se configure el silencio Administrativo negativos, sea el peticionario quien decida dar por agotada la vía gubernativa” (La subraya es del texto).



septiembre de 2015, respectivamente, de la Notoria Primera del Círculo de Soacha, Cundinamarca.

Se desprende de la lectura de los hechos de la demanda, que el demandante tiene la intención de demandar los actos productos del silencio de la administración. Ello es igual a decir que se pretende la nulidad de los silencios de la administración, producto de la mencionada petición de 3 de diciembre de 2014 y del recurso de reposición interpuesto el 25 de mayo de 2015. Tal interpretación que se realiza de la demanda garantiza los principios constitucionales ya mencionados. Vale decir que en la sentencia se determinará si los silencios son negativos o positivos, pues no concierne definirlo en esta oportunidad procesal.

Bajo tal entendimiento, es válido afirmar que los actos productos del silencio de la administración no le son aplicables la figura procesal de la caducidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 (Num. 1º, Lit. d), según el cual la demanda se puede presentar en cualquier tiempo contra “*Se dirija contra actos producto del silencio administrativo*”. Por ello, el Despacho considera que las actuaciones acusadas están eximidas del término de caducidad. Más adelante, se declarara improbadada la excepción de caducidad.

2. FIJACIÓN DEL LITIGIO.

Hemos visto que la parte actora persigue la nulidad de varias actuaciones administrativas, a saber: (i) los actos por medios de los cuales se encargó a Martha Fabiola Gualteros Rocha como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CASUR, conformada por las Resoluciones 6513, 7339 y 7653 de 2014 y el silencio administrativo frente a la petición de 3 de diciembre de 2014 que negó los emolumentos del cargo; y (ii) los actos que liquidaron y reajustaron las prestaciones sociales por retiro del servicio, conformado por las Resoluciones 3993 y 6960 de 2015, más el silencio administrativo frente al recurso de reposición de 25 de mayo de 2015 interpuesto contra la Resolución 3993 de 2015. Sin embargo, toda la actuación en su conjunto, resoluciones y silencios administrativos, se demandan en cuanto omitieron reconocer los emolumentos o salarios y prestaciones sociales como producto del encargo de las funciones como Jefe de la Oficina de la Oficina Jurídica, efectuados durante las vacaciones y la incapacidad del titular del empleo. El restablecimiento del derecho se dirige exclusivamente obtener el pago de los emolumentos producto de los encargos.

A manera de corolario de las pretensiones, el litigio se fija en los siguientes términos: determinar si la accionante tiene o no derecho al pago de los emolumentos producto del encargo de las funciones de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CASUR, efectuado a través de las Resoluciones 6513, 7339 y 7653 de 2014.

3. PRUEBAS.

3.1 Parte actora. La accionante anexó documentos con la presentación de la demanda.



Adicionalmente, solicitó las siguientes pruebas: (i) hoja de vida y la certificación de los cargos desempeñados entre el 9 de marzo de 2011 y el 22 de febrero de 2015.

Se niega la prueba solicitada, en tanto, en el expediente obran los actos administrativos de vinculación de la demandante y de ellos se puede determinar el tiempo de vinculación en el empleo que ostenta y los encargos efectuados.

(ii) Solicita se requiera a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que se pronuncie sobre legalidad de los actos expedidos bajo el Decreto 2701 de 1988.

Se niega la prueba solicitada por considerar este Despacho que la misma resulta impertinente, inconducente e inútil para determinar si los empleados en encargo tienen derecho a la remuneración del empleo para el que fue encargado, o continúan con la remuneración del cargo en el que se encuentran, adicionalmente el estudio de legalidad de los actos demandados se constituye en el objeto de la demanda y por lo tanto, corresponderá a este Juzgado determinar si procede su nulidad.

Los documentos aportados con la demanda, se decretarán e incorporarán al expediente.

3.2 Parte demandada. La administración aportó las pruebas con la contestación de la demanda las que se decretarán e incorporarán al expediente.

4. AUDIENCIAS.

Es claro que están reunidas las condiciones para prescindir de las audiencias de inicial y de pruebas, previstas en el artículo 180 y 181 del CPACA, respectivamente. Sobre la audiencia de alegaciones y juzgamiento enunciada en el artículo 182 del CPACA., se resolverá una vez cobre ejecutoria la presente providencia. Ello, por cuanto el artículo 182A del CPACA exige que se cumpla lo decidido sobre las excepciones previas, las pruebas y la fijación del litigio, antes de avanzar con el trámite del proceso.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO. DECLARAR que infundadas las excepciones previas intituladas así: “falta de jurisdicción”, “ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones” y “caducidad”, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO. La **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si la accionante tiene o no derecho al pago de los emolumentos producto del encargo de las funciones de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CASUR, efectuado a través de las



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001-33-35-010-2015-00866-00

Resoluciones 6513, 7339 y 7653 de 2014.

TERCERO. DECRETAR E INCORPORAR al expediente, con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de prueba solicitados y aportados con la demanda y con la contestación de la demanda, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO. SE NIEGA la prueba documental solicitada por la parte actora en el acápite “pruebas” que refieren a recaudar la hoja de vida, la relación de cargos desempeñados, y un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por las razones arribas expuestas.

QUINTO. PRESCINDIR de la audiencia inicial y de pruebas establecidas en la ley para tramitar el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA.

SEXTO. Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

8P8

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ
JUEZ

JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.-SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6624eba26741988d1da18b0f3bc354fcf783dd7890bbd85979338a14ac64e154

Documento generado en 29/04/2021 12:43:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>